



Resolución No. CSJBOR23-925
Cartagena de Indias D.T. y C., 31 de julio de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-00537
Solicitante: Jorge Quintana Marrugo
Despacho: Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena
Servidor judicial: Carmen Luz Cobos González y Ana Ayola Cabrales
Tipo de proceso: Ejecutivo
Radicado: 13001400301120080084100
Fecha de sesión: 26 de julio de 2023

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 12 de julio de 2023, el señor Jorge Quintana Marrugo solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 13001400301120080084100, que cursa en el Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, dado que, según indica, se encuentra pendiente para resolver solicitud de terminación y levantamiento de medidas cautelares.

1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-673 del 18 de julio de 2023, comunicado el 18 del mismo mes y año, se dispuso requerir a las doctoras Carmen Luz Cobos González y Ana Ayola Cabrales, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, esto, porque al revisar el expediente en la plataforma de consulta TYBA de la Rama Judicial, se observó que lo requerido no había sido tramitado.

1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad concedida para ello, la doctora Carmen Luz Cobos González, jueza, rindió informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011); indica, que la solicitud de terminación del proceso pasó al despacho el 20 de febrero de 2023, el despacho corrió traslado a las partes por auto del 17 de marzo del mismo año y mediante providencia del 17 de julio, se dispuso decretar la terminación del proceso y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares.

Que si bien la solicitud no fue resuelta dentro de los términos legales, ello obedece a factores ajenos a la voluntad de los servidores del despacho, como lo es la excesiva carga laboral que padece la agencia judicial, que a la fecha cuenta con un inventario que asciende a más de 5000 expedientes, que semanalmente se reciben en promedio de 250 solicitudes, situación que dificulta dar trámite oportuno a los memoriales.

Por lo anterior, afirma la funcionaria judicial que en el presente caso no existe vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso, comoquiera que la Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena - Bolívar. Colombia



tardanza no le es atribuible a ellos, sino que se encuentra justificada en la capacidad máxima de respuesta de la agencia judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Jorge Quintana Marrugo, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por la funcionaria judicial, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

2.4 Caso concreto

El señor Jorge Quintana Marrugo solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 13001400301120080084100, que cursa en el Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, porque, según indica, se encuentra pendiente para resolver solicitud de terminación y levantamiento de medidas cautelares.

Frente a las alegaciones del peticionario, afirma la funcionaria judicial que la solicitud de terminación del proceso pasó al despacho el 20 de febrero de 2023, se corrió traslado a las partes por auto del 17 de marzo del mismo año, y mediante providencia del 17 de julio, se dispuso decretar la terminación del proceso y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe rendido bajo la gravedad de juramento y los documentos aportados, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Solicitud de terminación del proceso y levantamiento de las medidas cautelares	20/02/2023
2	Ingreso al despacho	20/02/2023
3	Auto que ordena correr traslado de la solicitud de terminación del proceso	17/03/2023
4	Fijación en lista	29/03/2023
5	Vencimiento término del traslado	10/04/2023
6	Ingreso al despacho	11/04/2023
7	Auto resuelve decretar la terminación del proceso y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares	17/07/2023
8	Comunicación requerimiento de informe dentro de la solicitud de vigilancia	18/07/2023

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena en dar trámite a la solicitud de terminación del proceso y levantamiento de medidas cautelares.

Observa esta Corporación que, según el informe rendido por la funcionaria judicial, el 17 de julio se profirió auto mediante el cual se decretó la terminación del proceso y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, esto, con anterioridad a la comunicación del requerimiento de informe efectuado por esta Seccional.

Con relación a la actuación de la doctora Carmen Luz Cobos González, jueza, se tiene que: (i) entre el ingreso al despacho de la solicitud de terminación del proceso el 20 de febrero de Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena - Bolívar. Colombia

2023, y el auto del 17 de marzo del mismo, que resolvió correr traslado a las partes, trascurrieron 19 días hábiles; (ii) entre el ingreso al despacho del proceso el 10 de abril de 2023 y el auto que resolvió decretar la terminación del proceso adiado el 17 de julio de la presente anualidad, trascurrieron 64 días hábiles, por lo que las actuaciones fueron adelantadas por fuera del término establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...).”

Así las cosas, se observa una presunta mora de 9 y 54 días hábiles por parte de la funcionaria en emitir pronunciamiento que resolviera lo requerido por el quejoso; no obstante, mal haría esta Corporación en ignorar lo afirmado bajo la gravedad de juramento por la servidora judicial, al indicar que la tardanza se encuentra justificada en la alta carga laboral que padece el juzgado, por lo que se pasará a verificar la información reportada en la plataforma estadística SIERJU respecto del período en el que se presume la mora.

PERÍODO	INVENTARIO INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	EGRESOS	INVENTARIO FINAL
1° trimestre de 2023	5747	154	1	84	5816
2° trimestre de 2023	5816	241	4	98	5928

Se tiene que la carga efectiva es igual a inventario inicial más ingresos menos salidas, por lo que en el caso del despacho se tiene para el período relacionado:

Carga efectiva para el 1° semestre del 2023 = (5747+395) – 5

Carga efectiva para el 1° semestre del 2023 = 6137

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado Civil Municipal de Ejecución de sentencias para el año 2023 = 1652 (Acuerdo PCSJA23-12040 de 2023)

Con base en las estadísticas anteriormente relacionadas, y teniendo en cuenta que la mora que se estudia inició en el 1° trimestre del año en curso, se encuentra que, en el tiempo analizado, la funcionaria judicial laboró con una carga efectiva equivalente al 371,48% respecto de la capacidad máxima de respuesta establecida para el año 2023, de lo que se colige la situación de congestión del despacho en cuanto a sus cargas laborales.

Debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura ha definido la “*capacidad máxima de respuesta*” como punto de referencia para establecer el número límite de procesos que pueden ser atendidos por un juzgado o despacho de magistrado, atendiendo a la capacidad humana y logística con la que cuente dicha oficina para responder a la demanda de justicia; en el caso particular del Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, se tiene que su carga laboral superó el límite establecido por dicha corporación, lo que demuestra la situación de congestión del despacho.

Igualmente, al consultar la producción del despacho en el período estudiado con anterioridad, se obtuvo el siguiente resultado:

TRIMESTRE	AUTOS INTERLOCUTORIOS	SENTENCIAS	PROMEDIO DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR DÍA
1° - 2023	1040	151	20,89
2° - 2023	812	0	14,5

Según el criterio esbozado por Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mora sancionable en los funcionarios judiciales será aquella en la que quede demostrado que ha sido la negligencia la que ha reinado y no el trabajo, que a pesar de arduo, no dé el fruto esperado por las partes interesadas en el proceso. Así lo dispuso esa colegiatura en sentencia dentro del proceso N° 110010102000200202357:

“(...) lo anterior conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala que ha considerado que una de las formas en que se exteriorizan o materializan los esfuerzos de los funcionarios por evacuar su trabajo dice relación con la concreta producción laboral que registra estadísticamente. Para probar tal hecho, esta colegiatura ha convenido entonces en determinar como mínimo uno (1) el número diario de providencias de fondo (sentencias y autos interlocutorios) para mediante un proceso de confrontación con el tiempo hábil específicamente laborado establecer si en cada caso concreto es viable predicar esmero y dedicación en la ejecución de sus tareas propias de su función, y así considerar la excesiva carga de trabajo como la causa irresistible de la mora (...)”. (Subrayado fuera del texto original)

Se tiene entonces, de la aplicación de la fórmula propuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el período en el que se presume la mora, que la funcionaria judicial presentó una producción superior a la mínima determinada, tal y como se desprende del cuadro señalado en líneas precedentes, cifras que, como producción laboral del despacho supera la establecida por esa sala, por lo que bajo ese supuesto, no habría lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora Carmen Luz Cobos González, jueza 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena.

En relación a la doctora Ana Ayola Cabrales, profesional universitario con funciones secretariales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cartagena, al revisar el informe y el expediente digital, se encuentra que los ingresos al despacho se llevaron a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...)”.

Así las cosas, y como quiera que no existe una situación de mora que deba ser normalizada mediante la vigilancia judicial y que se logró demostrar que la tardanza por parte del despacho encartado tuvo lugar en la alta carga laboral, se dispondrá al archivo del presente trámite administrativo respecto de ambas servidoras judiciales.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

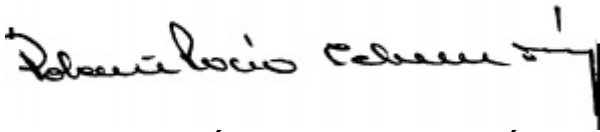
III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Jorge Quintana Marrugo, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 13001400301120080084100 que cursa en el Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al solicitante, así como a las doctoras Carmen Luz Cobos González y Ana Ayola Cabrales, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 2° de Ejecución Civil Municipal de Cartagena.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

MP. IELG/MFLH